

Comunicación
y Ciudadanía

EL RINCÓN DE LA ACADEMIA

El libro **Comunicación y Ciudadanía**, de **Hernando Rojas, Margarita Orozco, Homero Gul y Magdalena Wojcieszak** (editores encargados) de la Universidad Externado de Colombia, es el tercero de la línea editorial en Comunicación Política inaugurada por la Universidad Externado en 2009.

En este volumen se presentan los resultados y el análisis comparativo de las investigaciones Comunicación y Participación Política Colombia, 2006, 2008 y 2010, realizadas por el Centro para la Investigación en Comunicación

Política y la Universidad de Wisconsin-Madison; se examinan en detalle los factores sociodemográficos y psicológicos que se relacionan con el acceso a internet, el impacto de las tecnologías móviles de comunicación sobre la conversación política, los factores que predicen la polarización política de los ciudadanos, las formas emergentes de ejercicio ciudadano en materia ambiental, en fin, temas todos que propenden por un papel más destacado del periodismo en los procesos de integración y participación ciudadana.

Elemental, mi
querido WatsonRODRIGO
UPRIMNY *

NO ENTIENDO POR QUÉ LA CORTE Constitucional se ha demorado tanto en decidir favorablemente la adopción reclamada por las madres lesbianas de Medellín.

Digo esto porque si la Corte es coherente con sus precedentes, como debe serlo, y toma en cuenta la abrumadora evidencia científica sobre el tema, como también debe hacerlo, la decisión es una simple deducción lógica: es legítima la adopción por parejas del mismo sexo. Veámoslo.

Las premisas normativas del razonamiento son claras: i) la adopción existe para que un niño o niña sin familia logre una familia o, como en el caso de Medellín, para que el hijo de uno de los integrantes de una pareja pueda ser adoptado por su compañero o compañera permanente; ii) la Corte aclaró en la sentencia C-577 de 2011 que las parejas del mismo sexo forman una familia constitucionalmente protegida; iii) en Colombia, desde hace décadas, las parejas heterosexuales pueden adoptar, estén o no casadas; iv) el Código de la Infancia y la Adolescencia, en su artículo 68, señala que podrán adoptar "conjuntamente los compañeros permanentes", sin hablar de parejas heterosexuales, lo cual sugiere que legalmente la adopción igualitaria está autorizada; y v) conforme a la Corte, es discriminatorio que, sin una poderosísima justificación, la ley o las autoridades priven a una pareja del mismo sexo de una posibilidad reconocida a una pareja heterosexual.

Esas premisas normativas parecen conducir a las siguientes conclusiones: todo menor tiene derecho a que una de las posibles familias que lo adopte sea una pareja del mismo sexo, y a este tipo de parejas debe serles permitida la adopción.

La única posibilidad de rechazar esas conclusiones es que hubiera una evidencia clara de que la adopción por parejas del mismo sexo causa daños al adoptado, pues si así fuera, en nombre del interés superior del menor, habría que prohibir la adopción igualitaria. Pero, y aquí entra la premisa fáctica, ese reparo es falso: las personas criadas por parejas o personas homosexuales no tienen más problemas de desarrollo psicológico o social que aquellas criadas por parejas heterosexuales.

Una prueba contundente de esa tesis es el estudio *Lesbian and Gay Parenting* de la Asociación Americana de Psicología, que cité en una columna previa, y que demuestra que no hay ninguna evidencia de que sea perturbador para el desarrollo de un niño o niña ser criado por un individuo o pareja homosexual. En Colombia, universidades muy serias, como la Nacional, los Andes o la Javeriana, han llegado a conclusiones similares.

Entonces, como diría Sherlock Holmes, "este caso es elemental, mi querido Watson": la Corte no puede sino permitir la adopción por parejas del mismo sexo. Y debe entonces fallar a favor de las madres de Medellín.

Por eso mismo, este caso es también un test decisivo para evaluar si el nuevo magistrado Guerrero, a quien conozco y respeto, es realmente un juez imparcial (como yo creo que es), que respeta los precedentes de la Corte (como lo prometió en su discurso ante el Senado), y no un guerrero del moralismo que antepone sus convicciones personales a lo ordenado por la Constitución.

* Director de Dejusticia (www.dejusticia.org) y profesor de la UN.

Editor Domingo: Nelson Freddy Padilla Castro.
Jefe de Redacción: Eiber Gutiérrez Roa.
Editor Multimedia: Leonardo Rodríguez.
Jefe de Clero: Ricardo Ávila Palacios.
Coordinador Opinión: Andrés Páramo Izquierdo.
Editores:
Arte y Gente: Fernando Araújo V.
Deportes: Olga Lucía Barona.
Internacional: Angélica M. Lagos C.
Investigaciones: Norbey Quaveo H.
Judicial: Juan David Laverde P.

Política: Hugo García S.
Negocios: Edwin Bohórquez Aya.
Bogotá: Juan Camilo Maldonado.
Vivir: Pablo Correa.
Revistas: Angélica Gallón.
Redacción Comercial: Mariana Suárez.

Redacción:
Política: Andrea Forero, Felipe Morales, Alfredo Molano.
Arte y Gente: Juan Carlos Pedrahlita, Liliana López S., Santiago Larotta.

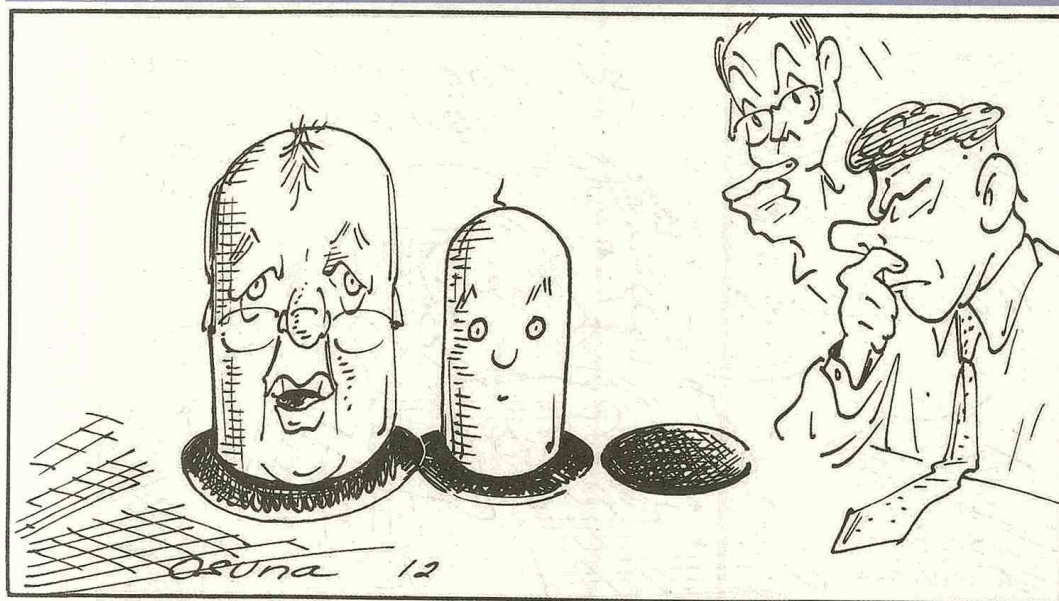
Deportes: Luis G. Ordóñez, Manuel Dueñas.
Judicial: Diana Durán, John Alexander Marín C., Juan Sebastián Jiménez.
Bogotá: Laura Ardila, Viviana Londoño, Verónica Téllez.
Negocios: Jairo Chacón, David Mayorga, Héctor Sandoval, Carolina Cantillo.
Vivir: Carolina Gutiérrez Torres.
Internacional: Diego Alarcón, Daniel Salgar.
País: Juan David Torres.
Redacción Comercial: Sandra del Castillo, Alejandra Vanegas y Lorena Machado.

Editor Gráfico: Julio César Carriero Ladino.
Diselo: William Nampira, Mario F. Rodríguez, Eder Rodríguez, Andrés Sánchez, Diana Carolina Correa.
Infografía: Jonathan Bojarano.

Editor Fotográfico: Nelson Sierra G.
Fotografía: Gabriel Aponte, Oscar Pérez, David Campuzano, Daniel Gómez y Luis Ángel S.

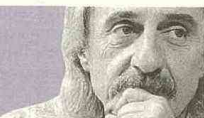
Rasgos y Rasguños

Por Osuna



Matrioska

El meollo

ALFREDO
MOLANO
BRAVO

LA ALMENDRA DE LA NEGOCIACIÓN con la guerrilla es el tema de las armas, tanto las que hoy se enfrentan como las que mañana garantizarían el cumplimiento del acuerdo. El asunto es esencialmente militar, aunque el punto no se haya hecho explícito en la agenda. En este sentido, los principales negociadores deberían ser, en una primera etapa, los militares. Y por eso la propuesta de las Farc parece razonable: militares activos deberían estar sentados negociando con comandantes de la guerrilla. Frente a frente. No son suficientes los exgenerales Mora y Naranjo, aunque sean representantes válidos de las Fuerzas Militares. Podrán tener ascendencia sobre los soldados, pero no mando. Y lo que se necesita, en primer lugar, es negociar un cese al fuego.

Horacio Serpa, negociador en Tlaxcala, recordó esta semana, en el lanzamiento de la propuesta de Samper para humanizar la guerra, los fracasos de los intentos anteriores con Betancur, Barco, Pastrana, de todo pacto en medio de la balacera. Imposible. La mesa se convierte en un tribunal que termina comiéndose la negociación. Si se trata de no re-

petir errores, ese caos se debe evitar y por tanto ir de entrada a silenciar los fusiles. El acuerdo entre Belisario Betancur y Marulanda no se pudo cumplir más que en la prensa porque era imposible de controlar. La iniciativa de Samper parece ser la manera de llegar al cese al fuego por etapas. Mauricio Jaramillo, *El Médico*, uno de los negociadores de la guerrilla, lo sugiere cuando propone la suspensión de atentados contra el sector energético a cambio de la suspensión de bombardeos. Sin duda, una sucesión de acuerdos para humanizar la guerra mientras se firma la paz es el camino para detener la plomera mientras se negocian las soluciones políticas definitivas al desangre.

Desde luego que el cese al fuego supondrá una estricta vigilancia por parte de un agente neutral y fuerte que dé garantías a las partes. Hoy la supervisión mediante satélite —y otras formas electrónicas de espionaje— resuelve los obstáculos que impedieron a Chicho Bejarano e Iván Márquez encontrar mecanismos de verificación y que terminaron en la reactivación de los combates. No se trata ahora de descubrir el agua tibia, sino de acordar el cumplimiento estricto del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que ninguna de las partes beligerantes ha cumplido. En el fondo, el DIH es un código de naturaleza militar para sacar a los civiles de la pelea e impedir la guerra sucia. Algunas de esas normas, como propone Samper, aclima-

tarían el cese al fuego. Los bombardeos, la desaparición, el secuestro, el reclutamiento de menores, se pueden convertir en temas de una agenda compartida para llegar con decisión a firmar un cese al fuego y, entonces sí, entrar a la negociación de fondo: el problema del poder. Se trataría de definir el cumplimiento progresivo de reglas específicas y obligatorias, rigurosamente vigiladas por un organismo acordado y competente. El papel de la comunidad internacional, y más específicamente de la latinoamericana, es en este punto decisivo.

Un cese al fuego supone necesariamente la participación de todo movimiento insurgente. Hablo del Eln, pero también de los restos del Epl —con Megateo incluido—. Más aún, estas dos fuerzas tendrán que entrar, tarde o temprano, a negociar su participación en la mesa que se instalará en Oslo y se desarrollará en La Habana, pero un acuerdo sin su participación resultaría espurio.

El cese al fuego debe ser tan sólido como para seguir vigente después de la firma del acuerdo general. Será la verdadera prueba de la negociación. Quizá no haya una garantía más real del pacto que la profunda recomposición en un solo cuerpo de las fuerzas que se enfrentaron durante medio siglo. Las guerras civiles deben terminar en un ejército nacional unificado y único. La negociación es, de hecho, una invitación obligada a tragar sapos.